



CUENTA REGRESIVA

Por Francisco Peña Torres.
(Febrero 2023)

Cuenta regresiva: secuencia de tiempo que consiste en contar la historia hacia atrás, para indicar el lapso de tiempo que queda antes de que acontezca un acontecimiento previsto.

Nº1 Febrero 1973

En estas páginas trataremos de recordar los meses que van desde el mes de febrero de 1973 hasta septiembre de dicho año, fecha de esa fractura mayor en la historia de nuestro país. Hemos elegido como fecha de inicio ese mes, no porque ignoremos todos los hechos que se concatenan desde la elección de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, sino porque nos parece que esta campaña electoral para las parlamentarias de marzo de 1973, la última llevada a cabo antes de la interrupción abrupta del régimen democrático, es una suerte de condensado, de catalizador indicativo de la intensa lucha política que culminó con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que cambiará profundamente y para siempre la historia de nuestro país.

La campaña electoral por las parlamentarias del 4 de marzo de 1973 fue particularmente virulenta, en un país polarizado en la que algunos consideraban (derecha y PDC más algunos mandos de las FFAA, que se trataba de la última oportunidad para mantener a Chile dentro del zarandeado cauce institucional existente. En efecto, el sistema capitalista dependiente, ampliamente desarticulado por la acción y la aplicación del programa de gobierno de la Unidad Popular, ofrecía entonces a las diversas fuerzas políticas una suerte de objetivo -inalcanzable para los más lúcidos opositores- (tanto civiles como militares) quienes expresaban lo que públicamente Sergio Onofre Jarpa explicitaba en sus “jingles” publicitarios de campaña, luego de unos segundos de una marcial marcha militar :”No necesitamos un nuevo Parlamento, sino un nuevo gobierno”.

Paralelamente, un informe interno de las FFAA esperaba sin muchas ilusiones que los resultados electorales dieran a la oposición (CODE, Confederación Democrática, es decir, PDC, PN, DR, PIR) los 2/3 de parlamentario (senadores) requeridos para destituir constitucionalmente al Presidente de la República. En marzo de 1973 debía elegirse la mitad del Senado, es decir 25 senadores y la totalidad de la Cámara de Diputados (150 diputados). Dicha justa electoral convocó a un universo electoral de 3 687 105 electores, es decir, 81,75% de sufragantes. Tratándose de la eventual destitución del Presidente de la República, quien decidía finalmente según la Constitución de 1925, en vigor por ese entonces, era el Senado que actuando como jurado zanjaba tan gordiana cuestión. Ahora bien, los resultados obtenidos por la oposición que obtuvo el 55,49%, no alcanzaban los 2/3 necesarios requeridos. La UP obtuvo el 44,23% de los sufragios, es decir, 7,63% más que en 1970 con ocasión de la elección de Salvador Allende, y ello a pesar de los innumerables problemas que enfrentaba el gobierno en el plano económico debido al desabastecimiento y al acoso político interno e internacional montado por la conspiración interna y externa.

Es por eso que amplios sectores de la derecha y la DC, se mostraron abatidos e inmediatamente se dieron a la tarea de implementar un plan civil y militar manipulado por Washington para derrocar al Presidente Allende.

Todos los ámbitos de la sociedad chilena habían sido afectados y ese verano de 1973, el conocido Festival de La Canción de Viña del Mar -se realizaba el XIV° Festival- no escapó a la polarización. Ya en los años precedentes, los artistas invitados que una parte de los espectadores estimaban apoyaban al gobierno de la UP fueron copiosamente abucheados y recibidos por unas ensordecedoras silbatinas : Miriam Makeba, Tiempo Nuevo, un cantante ruso que interpretó Kalinka, una conocida canción del folklor ruso. Ese año, 1973, se presentó por vez primera un conjunto musical que años después sería célebre en todo el país : Illapu.

En la sección folklórica del Festival se constató que parte del polarizado público abucheaba cada vez que se mencionaba al premio Nobel Pablo Neruda, autor junto a Vicente Bianchi (música) de la canción “A la bandera de Chile”, interpretada por “Los Fortineros”.

Durante este Festival y en plena campaña parlamentaria se anunció el deceso del conocido cantautor Rolando Alarcón, del movimiento Nueva Canción chilena, a quien Guillermo Oddó de Quilapayún dedicó la actuación de su grupo. Quilapayún había sido recibido con silbatinas y gritos por parte de la asistencia, que redoblaron cuando interpretaron temas como “La batea” y “Las ollitas”, presentes profusamente en la campaña electoral. Riña y peleas entre espectadores de ambos bandos se desarrollaron durante su presentación.

Los animadores del Festival, César Antonio Santis y Rosa María Barrenechea llamaron al escenario al artista siguiente, un humorista, Tato Cifuentes, que a duras penas arrancó algunas risas a los espectadores.

La polarización política llegaba hasta la dirección de TVN, que transmitía para todo Chile dicho Festival. Años más tarde se sabría que por decisión de Gonzalo Beltrán (PDC), uno de los directores de programas no se grabó parte de la actuación de Quilapayún, como “una manera de calmar los ánimos”, perdiéndose así para siempre dicha grabación. Uno de los directores de TVN, nombrado en 1971 por el gobierno de la UP, era Helvio Soto y luego fue designado Augusto Olivares como jefe de prensa del mismo canal.

A raíz de los incidentes ocurridos, el Festival fue suspendido algunos días así como la prevista actuación del grupo de música tradicional chilena “Los Huasos Quincheros”, quienes años más tarde serían “embajadores culturales” de la Junta Militar.

El certamen en su parte folklórica premió a Charo Cofré por el tema “Mi río” y en la parte internacional el premio recayó en Julio Zegers por su canción “Los pasajeros”.

La noche del 4 de marzo de 1973, sectores de derecha y algunos mandos militares comprobaron que sus predicciones se cumplían: no se habían logrado los 2/3 constitucionales requeridos para destituir a Salvador Allende.

Orlando Sáenz, del Comando civil de la conspiración, presidente de ASIMET (Asociación de empresarios de industrias metalúrgicas) y luego, desde 1971, presidente de la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril), por decisión del dirigente empresarial Eugenio Heiremans. Sáenz , dirigente empresarial ayudista de Patria y Libertad y promotor del golpe militar contra el gobierno del Presidente Salvador Allende y se ocupaba de los flujos de dineros que llegaban al núcleo de la conspiración desde la empresa privada chilena y extranjera. Apoyó tempranamente a la Junta Militar, asumiendo puestos en instancias internacionales. En una entrevista publicada antes del 4 de marzo de 1973 había vaticinado:” Si la UP obtiene más del 40% no quedará otra salida que una intervención militar”.

Las puertas de la intervención militar quedaban así abiertas en marzo de 1973 y los vacilantes de derecha y DC + algunos militares, comenzarían a prepararse para llevar a cabo un golpe militar. En otra entrevista, posterior al 11 de septiembre y luego que Sáenz se distanciara de la Junta militar, explicó que después del 4 de marzo de 1973, “todo devino más claro, más fácil, puesto que el desenlace era previsible”.

Nº2 Marzo 1973

(Abril 2023)

Luego de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, el Presidente Allende procedió a una reestructuración de su gabinete, que no incluyó a ningún oficial de las FFAA. Los resultados de la elección de diputados y de la mitad del Senado habían sido un balde de agua fría para los conspiradores civiles y militares puesto que la oposición no obtuvo como esperaba, los 2/3 tercios constitucionales indispensables en esta última asamblea para destituir al Presidente de la República. Se había tratado y se trataría todavía como veremos más adelante de una táctica de “emplazamiento”, aculando al gobierno a una suerte de “golpe blanco”.

La negativa de las FFAA de participar institucionalmente en el gobierno de la UP se acentuaría con el correr de las semanas y meses. Pero desde abril de 1973, conspiradores de las diferentes armas, sobre todo de la Armada y la Fach habían entablado ya conversaciones, con algunos oficiales superiores del Ejército (Arellano Starck) y Carabineros (Arturo Yovane Zúñiga). Pero aún en ese mes de abril, el grueso de la oficialidad superior del Ejército, siguiendo la línea defendida por el general Prats, observaba una actitud constitucionalista. Sin embargo, cundía la idea entre los uniformados que una intervención militar era inevitable, ante “el caos” desencadenado por el gobierno de la UP.

Altos oficiales de las FFAA ya estaban en contacto con el núcleo conspirativo. Esto era particularmente cierto en lo que respecta a la Armada, donde algunos de sus oficiales mantenían estrechos contactos con oficiales de la Inteligencia Naval estadounidense. Esta relación privilegiada de oficiales superiores con servicios de potencias extranjeras existía también en la Fach. El entonces coronel Juan Soler Manfredini de esta institución estuvo entre los primeros conspiradores, así como el coronel Mario Jahn Barrera. La relación con servicios de potencias extranjeras no era nueva. En la conspiración que condujo al asesinato del general Schneider en 1970, varios civiles y militares en servicio activo y en retiro habían participado activamente. El inefable y desprestigiado general de ejército Camilo Valenzuela y Alfredo Canales, “el macho Canales”, habían sido dados de baja. Este último, que había rehusado presentar su dimisión al general Prats, estuvo implicado en un intento de golpe durante el paro de octubre de 1972. El primero, Valenzuela, había recibido en 1970, 50 000 dólares de la mano del agregado militar de EEUU en Santiago, el coronel y agente de la CIA, Paul Wimert, para ayudar a realizar uno de los planes Track que apuntaba a impedir que Salvador Allende accediera a la presidencia de la república. Otro oficial, de la marina, también recibió 50 000 dólares, pero ante el fracaso del plan y el requerimiento de devolución del dinero por parte de Wimert, éste último lo devolvió. No así Valenzuela que protagonizó un bochornoso pugilato con Wimert, quien tuvo que recuperar los 50 000 dólares a bofetadas. Como dice el refrán popular:” Pocos generales latinoamericanos resisten un cañonazo de 50 000 dólares!”.

En la Armada, aparte del almirante Raúl Montero Cornejo y el capitán de navío Arturo Araya Peteers, edecán del Presidente Allende asesinado en las semanas siguientes, la correlación de fuerzas entre los oficiales superiores era abrumadora en favor del golpe de Estado.

En la Fach, existía también un grupo de oficiales constitucionalistas que después del 11 de septiembre de 1973 serán detenidos, torturados y procesados.

El núcleo conspirativo consideró que había que tranquilizar a los jóvenes oficiales, cuidando que no hubiese ningún exabrupto militar que lanzara por tierra el trabajo conspirativo emprendido desde hacía meses. Arellano Starck, una de las cabezas de la conspiración, lo explicó claramente: “Habría sido un suicidio actuar en forma aislada y sin coordinación...No se trataba de un golpe militar más, sino buscar la forma de poner al país a cubierto para el futuro de riesgos tan grandes como el que estábamos presenciando”.

En ese mes de abril de 1973 la conspiración aprovechaba también las disensiones en el campo de los propios partidarios del gobierno, que en el mes precedente había conocido el quiebre y división del MAPU, del cual ya en octubre de 1971 se había desprendido un sector que rehusó la definición “marxista” propugnada por la

dirección que encabezaba Oscar Garretón, Eduardo Aquevedo y Kalki Glauser y fundaron la Izquierda Cristiana.

Por su parte, el MIR, que aportaba su “apoyo crítico” al gobierno desataba tomas de fundos y predios en el sur, poniendo en duros aprietos a las autoridades gubernamentales.

También el radicalismo, partido histórico que se entronca con la revolución de 1859 y la derrota de la fracción rebelde liberal, encabezada por los Gallo y los Matta. El partido Radical había sufrido varias divisiones, una fracción derechista encabezada por Julio Durán, fundó la Democracia Radical e ingresaría a la CODE junto a la DC y al PN. Otra escisión dió lugar a la creación del PIR en agosto de 1971, que terminaría también en la CODE en abril de 1972.

Pero sin lugar a dudas que los enfrentamientos habidos en torno a la ENU (Escuela Nacional Unificada), proyecto presentado por el gobierno que se orientaba a la transformación integral de la educación, provocaron una agudización política mayor, toda vez que tocaba en gran parte a los sectores medios. En 1971 se había debatido ampliamente, pero dicho proyecto encontró una gran resistencia, al considerar la DC y la derecha que se trataba de instaurar una educación ideologizante y finalmente, ante la oposición de la Iglesia, ese año 1973 se postergó “*sine die*”, al no haber consenso político al respecto.

Ya desde 1971, un sector de la oposición había adoptado una “línea de masas”, tratando de ocupar y disputar a la izquierda, federaciones estudiantiles, sindicatos, gremios, y Juntas de Vecinos Fue así como en 1971, el candidato de la DC, Guillermo Yunge obtuvo la presidencia de la FESES y al año siguiente, Andrés Allamand del PN, fue electo en dicho cargo. EL PDC y la derecha actuaban de consuno, puesto que el alejamiento sin retorno de la DC y de los sectores medios de la UP, se había verificado simbólicamente el 8 de junio de 1971 con ocasión del asesinato del exministro Pérez Zújovic por la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). La alianza electoral Confederación de la Democracia (CODE) entre la derecha y el PDC quedaría sellada en julio de 1972, que incluyó también al PIR, PADENA y DR.

Pero en abril de 1973, la discusión pública en torno a la ENU que hemos mencionado más arriba, le vino como anillo al dedo al ambiente de deliberación militar cada vez más acentuado, consecutivo a la desilusión de civiles y militares por no haber obtenido los 2/3 necesarios en el Senado para despojar de su investidura al Presidente Allende. El núcleo conspirativo se empleó a fondo para tratar de soliviantar los ánimos de los oficiales, y la mayoría de los sectores civiles medios que rehusaban el proyecto gubernamental.

El 11 de abril, el entonces ministro de Educación, Jorge Tapia Valdés (PR) conferenció sobre dicho proyecto ante 60 oficiales de las tres ramas de las FFAA. Luego de su alocución subió a la tribuna el vicealmirante Ismael Huerta, de reconocida posición antigubernamental y que será ministro de RREE de la Junta y representante permanente de la Junta ante la ONU, calificando el proyecto de la ENU como intento de concientización marxista. Fue aplaudido a rabiar. Después intervinieron en términos similares el general Javier Palacios (quien 5 meses más tarde tomaría La Moneda por asalto transmitiendo el famoso y lacónico mensaje: “Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto.”) Asimismo hablaron los coroneles del Ejército, Pedro Espinoza y Víctor Barría, ambos serán posteriormente agentes de la DINA. La deliberación uniformada contra el gobierno de la UP se extendía a ojos vista.

Al mes siguiente, mayo de 1973, los conspiradores de la Marina, reunidos en la Cofradía Náutica, se encargaban junto a civiles de la elaboración de un programa económico del futuro gobierno, una vez depuesto el Presidente Allende. Era un grupo de economistas capitaneados por el ex oficial naval Robert Kelly Vásquez. Allí se concibió el “Ladrillo”, programa económico neoliberal considerado fundamental que serviría de inspiración al régimen que sucediera al gobierno de la UP. Había recibido la influencia de Milton Friedman de la Universidad de Chicago y había sido propuesto por economistas de la UC. Sus autores fueron Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zabala, quienes contaron con la colaboración de empresarios y economistas tales como Pablo Baraona, Alvaro Bardón (DC), Sergio de Castro, Juan Andrés Fontaine, Miguel Kast, Rolf Lüders, etc. Todos acérrimos partidarios del gobierno militar de Pinochet.

En mayo de 1973, el general Prats se ausentó casi un mes de Chile, siendo acompañado por los generales Bonilla y Benavides. Lo subrogó una vez más Augusto Pinochet en la Comandancia en jefe del Ejército. Visitó EEUU, el Vaticano y la URSS. De esta última trajo un recuerdo muy enojoso puesto que sus pares soviéticos tenían una opinión muy precisa acerca de la sedición que preparaban los generales chilenos que conspiraban y había, pensaban, que utilizar mano dura. “Muy buenos los tanques y cañones soviéticos -dijo a sus cercanos colaboradores- pero la URSS es otra realidad, agregó desencantado.

Dicho desencanto se agregaba al del Presidente Allende, quien luego de su visita a Moscú en diciembre de 1972, volvió a Chile sin obtener la ayuda financiera esperada.

El 6 de junio de 1973, justo luego de volver a Chile, el general Prats escribió en sus Memorias : “Al meditar sobre el encadenamiento de sucesos conflictivos, de pronto comprendo lo inexorable. A partir del 4 de septiembre de 1970 se ha venido gestando el derrocamiento del gobierno de la UP, cuyo plazo máximo está limitado a 1973...”.

Nº3 Junio 1973

El mes de junio de 1973 fue sin lugar a dudas, decisivo en el desarrollo de la conspiración que desembocaría en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

El 10 de junio el general Carlos Prats reunió a los generales Pinochet, Orlando Urbina, inspector general del Ejército, Mario Sepúlveda Squella, jefe de la inteligencia militar y de la Guarnición de Santiago y Guillermo Pickering, comandante de los Institutos militares. En sus memorias (Profesión soldado) el general Pickering, hoy fallecido, escribe que el general Prats explicó que había sido el blanco de presiones y ataques al asumir el ministerio del interior y la Vicepresidencia de la República...(dijo) haber recibido fuertes presiones para aprovechar la oportunidad que el Presidente estaba en el exterior y derrocarlo. “Yo no sé afirmó Prats, si esta gente alcanza a comprender lo que significa para un soldado la honorabilidad y la lealtad. Si llegado el caso tuviera que enfrentarme con el Presidente de la República lo haría cuando él estuviera aquí y no cobardemente aprovechando su ausencia”. Se había iniciado una campaña difamatoria e insultante contra su persona, Prats afirmó : ”He sido informado que esta siniestra campaña de desprestigio estaría vinculada a un alto jefe del Ejército”.

Ahora bien, los generales que ya dejaban entrever su disposición a derribar al gobierno de la UP eran varios: Oscar Bonilla (ligado a la DC), Arellano Stark, uno de los primeros promotores del golpe, Sergio Nuño, Carlos Araya (de quien Prats se refiere en forma despectiva), Javier Palacios, Arturo Viveros, Manuel Torres de la Cruz y otros. Hay fuertes indicios para considerar que el general al que se refería Prats, quien desplegaba una actividad en contra suya haya sido Arellano Stark, porque el mismo Prats escribe en sus memorias, refiriéndose a otra reunión de generales donde “Extrañamente, intervino el general Sergio Arellano Stark, que normalmente mantenía silencio en esas reuniones oficiales (y esta vez expresó) que no se puede aceptar que un militar sea ministro de Defensa...”

Hay que recordar que la situación política era en extremo polarizada y la premura que algunos conjurados expresaban cada vez con menos ambages, era consecuencia de que el mando central de la conspiración veía con temor que se extendieran por la oficialidad de mediano rango, iniciativas y acciones imprevistas que podrían echar por tierra el plan que aún no estaba completamente acabado, puesto que el dique de contención mayor era el Ejército y su comandante en jefe. En efecto, la existencia de generales constitucionalistas, los generales Orlando Urbina, Mario Sepúlveda, Guillermo Pickering, Ervaldo Rodríguez(agregado militar en Washington), Joaquín Lagos (Vº División) en el Ejército era un hecho y sin contar con la participación decisiva ellos, toda tentativa golpista estaba condenada al fracaso. Es por eso que a partir de junio de 1973 se inició un asedio político, parlamentario, gremial, utilizando todos los medios que disponía la conspiración : acusaciones constitucionales a ministros, huelgas de camioneros y estudiantes, utilización de la Ley de control de Armas, además por cierto de una permanente hostilización de la prensa opositora y acoso a la joven oficialidad puesto que este sector era mucho más permeable que los generales a la prédica golpista, como lo veremos con la sublevación del Regimiento Blindados nº 2 de Santiago.

Desde la elección parlamentaria de marzo de 1973, y ante la imposibilidad de obtener los 2/3 en el Senado y destituir legalmente al Presidente Allende, el alto mando de la conspiración decidió entonces avanzar en función del derrocamiento del gobierno de la UP mediante un golpe militar. Para ello desplegó una intensa labor de “ablandamiento” de sectores militares y civiles, logrando constituir un frente antigubernamental que incluía a federaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores del cobre, de camioneros, colegios profesionales y comercio detallista. Al mismo tiempo utilizaba todo el aparato institucional con acusaciones constitucionales a ministros y altos funcionarios. Una política envolvente que tenía claro que los plazos para la “decisión final” se acortaban. La Ley de Control de Armas había sido promulgada a fines de 1972 y comenzó a ser aplicada preferentemente como un instrumento intimidatorio en contra los trabajadores en fábricas emblemáticas en manos de estos : Sumar, Hirmas, Lanera Austral, etc. La no promulgación por parte del Ejecutivo de la reforma a las tres áreas de la economía era también otro factor que congregaba a los partidarios tanto de un “golpe blando”, esto es, sometimiento del gobierno a las exigencias de la oposición o, en su defecto, que fue lo que ocurrió finalmente, la “decisión final” a la que aludíamos más arriba.

El general Pinochet pasaba por ser un obediente oficial muy cercano a Prats y que por lo menos hasta pocos días antes del 11 de septiembre solidarizó con los generales constitucionalistas. Sin embargo, informaciones anteriores emanadas desde la estación de la CIA en Santiago lo incluía como uno de los acérrimos opositores al gobierno. Un enigma, aún si es posible ver en su extraña actitud, desleal para con su comandante en jefe, una táctica que le evitó ser individualizado como conspirador. Se considera que estuvo esperando hasta que la mayoría del Cuerpo de Generales se pronunciara en favor del golpe y entonces adhirió a él, pocos días antes del 11 de septiembre. En su libro -El día decisivo- trata de refutar la idea, *vox populi* entre los conjurados de la primera hora, que se habría unido a ellos ante la inminencia del golpe y el emplazamiento perentorio del almirante Merino, el general Leigh y Arellano Stark.

Durante ese mes Chile estuvo inmerso en crisis periódicas. Los esfuerzos del general Prats por mantener la cohesión institucional y los llamados a evitar la guerra civil eran pan de cada día. Como anota el general Pickering en sus memorias ya citadas :”Una guerra civil sólo acontece cuando las FFAA se dividen...En Chile no puede haber dictadura del proletariado ni dictadura militar. La primera no la permite la mayoría ciudadana ni las FFAA. La segunda, puede evitarse, pues para que ella se produzca sería necesario -so pretexto de resguardar la constitucionalidad- echarse la Constitución al bolsillo y supone una acción cruenta...El Ejército debe mantenerse en un marco profesional, apolítico y constitucional, continuando su tarea de aplicar la Ley de Control de Armas e intensificando la acción de los mandos para evitar la infiltración política en sus filas”.

A fines de junio, se iniciaron una serie de reuniones en Lo Curro, en casa del abogado, Jorge Gamboa Correa, a ellas asistían el general Leigh, el vicealmirante Patricio Carvajal, el contraalmirante Ismael Huerta, el general Francisco Herrera y Nicanor Díaz Estrada por la Fach y los generales del Ejército Arturo Vivero Ávila, Javier Palacios, Arellano Stark y Sergio Nuño. En otras reuniones aparecieron los generales Manuel Torres de la Cruz y Washington Carrasco de la III división. Hoy, aparece curioso constatar como dichos oficiales se movían y reunían con bastante soltura en las barbas de los servicios de seguridad gubernamentales. Era la “Cofradía de Lo Curro”.

En este tenso contexto fue cuando el general Mario Sepúlveda Squella, en una inusitada conferencia de prensa denunció el 28 de junio, que en la Primera Fiscalía Militar se incoaba un proceso por tentativa de “cuartelazo militar”, a realizarse en esos días, por militares, dijo, de “baja graduación”, en connivencia con civiles de Patria y Libertad. El intento de quebrantar la institucionalidad tenía lugar en el regimiento Blindados n° 2 de Santiago. El plan consistía en apresar al Presidente de la República en su residencia de Tomás Moro y apoderarse de La Moneda. Se habría asegurado la participación de unidades del Ejército, de la Armada y de la Fach. El movimiento nacionalista Patria y Libertad aportaría por su parte con militantes que provocarían disturbios. Pero luego, Patria y Libertad retiró su apoyo y no todos los oficiales comprometidos alcanzaron a ser avisados, de esta decisión.

Dos días antes, el 27 de junio, había tenido lugar el golpe de Estado en Uruguay, encabezado por el presidente Juan María Bordaberry y la cúpula militar. Algunos días más tarde, en un acto de solidaridad con el pueblo uruguayo en el Estadio Chile, el cantautor oriental Alfredo Zitarrosa entonaba una canción que rendía homenaje a las FFAA chilenas por haber sofocado el “Tanquetazo” y que le penaría el resto de su vida : “Hay milicos buenos, buenos como los milicos chilenos...”.

En esos días se realizó también la llamada “operación Charly”, destinada a desprestigiar al general Carlos Prats. Desde un coche que rodaba por la Costanera entre Pedro de Valdivia y Manuel Montt, se hicieron gestos amenazadores a Prats. Este desenfundó su arma de servicio y disparó contra el neumático del coche. De su interior descendió doña Alejandrina Cox Valdivieso. Prats estupefacto y confuso le pidió disculpas mientras un grupo lo rodeaba amenazante. Se dirigió hacia La Moneda en donde luego de relatar al Presidente lo ocurrido le presentó su dimisión que Allende rechazó inmediatamente. Luego se asistió a una reunión en el salón de actos del Estado Mayor del Ejército donde algunos generales presentes, con evidente desgano tardaron en expresarle su lealtad y solidaridad. El viento en el Cuerpo de Generales había comenzado a tornar.

El “Tanquetazo” se iniciaba dos días después, el 29 de junio, en medio de un clima tenso que ahora alcanzaba la máxima instancia castrense.

El regimiento Blindados n° 2 estaba comandado por el teniente coronel Roberto Souper Onfray, quien se sublevó cuando recibió la orden de entregar el mando de dicha unidad. El capitán de la misma unidad, Sergio Rocha Aros había sido detenido por realizar actividades conspirativas, junto a un teniente, Guillermo Gasset y por haber tomado contacto con Patria y Libertad en vista a un alzamiento militar. Souper, acompañado por oficiales del Blindados y 6 tanques y unos 80 soldados salió de su cuartel en calle Santa Rosa (9° cuadra al sur de la Alameda) en dirección de La Moneda y el ministerio de Defensa, haciendo fuego contra dicho ministerio, la Dirección general de Carabineros y La Moneda. En el ministerio de Defensa las ráfagas provocaron la muerte de algunos suboficiales y soldados y los alzados lograron recuperar al capitán Rocha Aros, al tiempo que otros tanques rodeaban La Moneda intimando rendición a la guardia de Palacio, pero ésta respondió al fuego. Desde la esquina nororiente de la plaza de la Constitución, en Morandé con Huérfanos, un tanque y un vehículo militar disparaban sin objetivos fijos. Un camarógrafo sueco/argentino, desde la calle Agustinas, a un costado del Banco Central filmó su propia muerte: un soldado apuntó concienzudamente su fusil sobre él y disparó, luego que un oficial lo hiciera con su pistola errando el blanco.

Rápidamente Prats, Sepúlveda, Pickering y Pinochet, con sus fuerzas (norte, sur, este y oeste) lograron la rendición de los alzados. Una vez reducidos los amotinados alrededor de La Moneda, Prats se fue al Tacna, temiendo que a algún oficial se le ocurriera reeditar el acuartelamiento de Viaux en 1969. Pero El Tacna al mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda ya iba en camino para cercar al Blindados n° 2. Luego llegó la Escuela de Suboficiales que se posicionó al sur de la Alameda.

Pickering y el ministro de Defensa José Tohá, en la Alameda frente a la U de Chile, trataban de contener a la muchedumbre que comenzaba a acudir al llamado de la CUT y de la izquierda, así como a la alocución del Presidente Allende, quien había dicho que el pueblo debía acudir y rodear La Moneda, con prudencia y sin exponerse. Fue en esos momentos que curiosamente dos de los más conspicuos conspiradores -Leigh y Carvajal- llamaron a José Tohá, el primero para indicarle que se encontraba dispuesto para bombardear a los alzados y el segundo pidiendo instrucciones al ministro. También Arellano Stark se hizo presente por teléfono, aduciendo que conocía a los del arma blindada y podía negociar su rendición. El general Mario Sepúlveda que seguía las instrucciones del general Prats y que a esas alturas desconfiaba de Arellano le respondió tajante:” Sólo habrá rendición incondicional!”.

El Blindados fue sitiado por el Tacna al mando del coronel Luis Ramírez Pineda. Prats había ordenado obtener la rendición incondicional de Souper, en caso contrario el coronel Ramírez Pineda debía “hacer desaparecer” al Blindados. Souper finalmente se entregaría en el Tacna a instancias perentorias del general Mario Sepúlveda. No así el capitán Rocha que asumió el mando de los alzados al interior del cuartel del Blindados. Ramírez Pineda lo instó a parlamentar pidiéndole a Rocha dejase salir a los oficiales y suboficiales que se habían negado a participar en la asonada. Rocha accedió y éstos salieron del cuartel con las manos en la nuca. Luego Rocha salió del cuartel y le dijo a Ramírez Pineda que el Blindados no se rendiría, le saludó militarmente y entró nuevamente al cuartel dándole la espalda. Este le ordenó detenerse y al no hacerlo disparó con su pistola de reglamento hiriéndolo en la cadera, pero sin tocar órgano vital alguno. Se desencadenó entonces una balacera y un cabo del Blindados (Jorquera) trató de utilizar una ametralladora Reimethal. Entonces un tirador escogido del Tacna le disparó varias veces. La octava bala le daría muerte. Hubo entonces muertos y heridos como resultado de enfrentamientos entre los propios militares.

El Presidente Allende hizo un llamado al pueblo por Radio Corporación para que se ocuparan fábricas, industrias y empresas y que se volcara al centro de Santiago, que saliera con prudencia a las calles con todo elemento que tuviera a mano. “Si llega la hora, armas tendrá el pueblo”, expresó. En el acto convocado por

la CUT por la tarde alrededor de La Moneda, luego de hacer aplaudir por la muchedumbre a los representantes de las FFAA, reiteró que las transformaciones seguirían haciéndose en pluralismo, democracia y libertad. Las masas exasperadas por los acontecimientos que acababan de vivir gritaban a voz en cuello: “A cerrar, a cerrar el Congreso Nacional!”.

Salvador Allende logró hacerse escuchar con dificultades y anunció un plebiscito “para que el pueblo se pronuncie”, dijo. Además, luego pidió autorización al Congreso para declarar estado de sitio, dada la gravedad de los acontecimientos ocurridos y las posibles ramificaciones existentes. Pero la Cámara de Diputados se opuso por 81 votos contra 52, considerando que el propio gobierno se había desde hacía tiempo colocado “en la ilegitimidad”.

Prats estimó que el motín había sido instigado por Patria y Libertad, y que además oficiales del Blindados habían entregado ametralladoras pesadas y municiones a esta organización, cuyos principales dirigentes se asilaron en la Embajada de Ecuador y algunos oficiales del Blindados en la Embajada de Paraguay.

El “Tanquetazo” dejó un saldo de 22 muertos, decenas de heridos y más de 50 detenidos. Dejó también el encono de sectores militares contra el coronel Ramírez Pineda por las víctimas consideradas innecesarias que causó al sofocar el levantamiento.

La justicia militar investigó concluyendo en la responsabilidad exclusiva de Roberto Souper y “que no había concomitancia con jefes y oficiales de otras unidades”. Lo que era falso a ojos vista.

Retrospectivamente, algunos comentarios sugieren que habría sido el momento de cortar el mal de raíz y realizar una purga en el generalato, pero la verdad es que a lo largo del país hubo múltiples expresiones de solidaridad con los alzados, sobre todo de la oficialidad media y baja, no así de los generales que con Prats a la cabeza habían sofocado el motín. Los generales involucrados ya en el golpe (Leigh, Arellano, Carvajal y Merino por la Armada, etc.) temieron que la conspiración fracasara y apuraron entonces como dijo Roberto Thieme de Patria Y Libertad en declaraciones posteriores, “la aceleración del golpe, el Golpe maestro que venía de afuera”.

El mismo Arellano declararía después que “No estábamos para asonadas...Nuestras intenciones eran bastante más serias...Por eso en un primer momento existió desazón, (el Tanquetazo) significaba un retroceso en nuestros planes”.

Nº4 Julio 1973

Aún no se esfumaba el olor a pólvora en las calles de Santiago luego del “Tanquetazo”, esa suerte de , exabrupto liderado por Patria y Libertad y oficiales del Blindados Nº 2, que había contado con un innegable apoyo entre los oficiales de mediano rango (coroneles, tenientes-coroneles, mayores, capitanes) en numerosas unidades a lo largo del país, el dirigente de P y L Roberto Thieme, que había simulado tiempo antes un accidente aéreo y que durante el transcurso del alzamiento del 29 de junio, siguió con atención el desarrollo de los acontecimientos mientras preparaba un contingente armado con la ayuda de militares argentinos y chilenos, más el apoyo logístico de “alemanes étnicos” en enclaves germanos instalados en la zona sur del país.

La tentativa del 29 de junio expresaba la política militar de P Y L tendente a contactar e infiltrar los mandos castrenses. P y L había llegado a la “leninista” conclusión, que las condiciones para realizar un golpe y la crisis existente en el país estaban “maduras”, pero agregó Thieme en declaraciones posteriores, no era un “golpe norteamericano”, sino nacionalista, compuesto por oficiales chilenos y antimarxistas. Thieme afirma que el movimiento fue detectado por la inteligencia militar (general Mario Sepúlveda Squella) y entonces se dio una contraorden que no llegó o no quiso ser cumplida por oficiales y civiles implicados en la rebelión y tuvieron como resultado “la asonada que desencadenó la rebelión del Blindados nº2. Estos hechos, explica Thieme, aceleraron “el otro golpe, el golpe maestro que venía de afuera”.

El “otro golpe”, del que habla Thieme, aun si entre los dos golpes -la asonada patrocinada por P Y L con oficiales de mediano rango y el golpe “maestro” que venía siendo preparado desde hacía meses desde el extranjero-, había por cierto vasos comunicantes. Pero de alguna manera el “Tanquetazo” interfería en el plan que llevaba a cabo el alto mando de la conspiración, por eso el general Arellano escribió posteriormente;” No estábamos para asonadas, nuestras intenciones eran bastante más serias, por eso que en un primer momento existió desazón, significaba un retroceso en nuestros planes”. Es decir los planes del golpe “maestro” que venía de afuera al que hace alusión Thieme.

Ello explica la confusión entre los conspiradores durante ese día 29, entre los “asonadistas” (P y L y oficiales de mediano rango) y el alto mando de la conspiración. Las apresuradas comunicaciones telefónicas de Leigh al ministro de defensa José Tohá, ofreciéndole sin tapujos el bombardeo de los sublevados del Blindados Nº 2, así como el llamado de Arellano Starck al general Mario Sepúlveda proponiéndose como mediador ante los rebeldes para convencerlos que regresaran a sus cuarteles, a lo que Sepúlveda Squella contestó tajante como ya hemos dicho en Cuenta regresiva anterior : sólo habrá rendición incondicional.

La noche del 29 de junio tuvo lugar una reunión de generales y almirantes para analizar la sublevación. Pinochet escribe en su Día Decisivo, una suerte de mescolanza de hechos reales con otros imaginados por él, destinados a corregir a posteriori los hechos reales ocurridos e incluirse como un participante activo en la conspiración, lo que ha sido refutado por varios participantes y organizadores activos de larga data del golpe.

Arellano escribe a posteriori que ya desde ese momento se había abierto un foso en el cuerpo de generales, sobre todo en lo que respecta a la participación de militares en responsabilidades gubernamentales. Varios generales (Bonilla, Arellano, Bravo, Nuño) consideraban que era necesario un acuerdo político con la oposición, lo que significaba que el gobierno debía cambiar de política en todos los ámbitos. Una especie de emplazamiento con el objeto de llevar a cabo un “golpe blanco”. Porque una de las consecuencias que derivó del “tanquetazo”, fue que el Alto Mando de la conspiración llegó a la conclusión que un golpe sólo podía tener éxito con la indispensable participación del Ejército, que a pesar de los acontecimientos del 29 de junio, había demostrado que la verticalidad del mando seguía vigente. La estación de la CIA en Santiago escribió al respecto en una nota dirigida a Washington : “los almirantes y generales hablan abiertamente sobre la necesidad de derribar al gobierno de la UP, pero llegan a la conclusión de que nada se puede hacer en el Ejército que no está preparado por el momento para una acción de este tipo”.

A comienzos del mes de julio fue convocada una reunión del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encabezado por el vicealmirante Carvajal y el general Díaz Estrada de la Fach, más cinco representantes de cada institución castrense. A esta reunión concurren Pinochet, Sepúlveda, Bonilla, Nuño, Arellano y Prats por el Ejército; el almirante Montero, Merino, Carvajal, Huerta, Daniel Arellano y Ricardo León por la marina; Ruiz, Leigh, Rodríguez, Claudio Sepúlveda, Martínez, Díaz Estrada y Francisco Herrera por la Fach.

Se debatieron los últimos acontecimientos ocurridos en el país, los problemas ligados a la violencia política, el desabastecimiento y la vulnerabilidad del país ante un eventual peligro exterior. Varios oficiales abogaron por una decisión militar ya que “no podemos seguir siendo espectadores mudos”, dicit Díaz Estrada.

En sus memorias el general Prats escribió respecto a dicha reunión : “El país vive en medio de un problema político, que deben resolver los políticos mediante un acuerdo para evitar el enfrentamiento armado”. Prats manifiesta que la presión militar sobre el gobierno podría tener como consecuencia una tiranía y un baño de sangre. Montero y Ruiz estuvieron de acuerdo con Prats. Arellano estimaba que todo acuerdo o tregua política implicaba la participación gubernamental de la oposición.

Desde comienzos del mes de julio, el “Comité de los 15” (5 oficiales por cada institución) había elaborado un “memorándum secreto”, en el cual las FFAA planteaban las soluciones para restablecer el principio de respeto a la autoridad y la normalización del país. Este fue entregado al Presidente Allende. Tan “secreto” era dicho memorándum que la estación de la CIA lo envió a Washington a inicios del mes de julio. Fue distribuido entre algunos generales, pero Pinochet nunca lo tuvo en sus manos.

Con una retórica conocida, el memorándum “secreto” hace hincapié en el carácter profesional, obediente y no deliberante de las FFAA, puntualiza que no se puede ignorar el surgimiento en el país de dos bandos irreconciliables. Se alude machaconamente a la existencia de grupos armados, el deterioro de la autoridad, etc. Proponía medidas concretas:

1. Promulgación de la Ley que definía las áreas de la propiedad privada, mixta y estatal.
2. Política económica y financiera que dé confianza a las áreas mixtas y privadas.
3. Frenar el éxodo de profesionales, regreso a Chile de profesionales calificados.
4. Autofinanciamiento de empresas del área social.
5. Terminar con el cuoteo y designar administradores e interventores con un criterio únicamente técnico.
6. Precios y tarifas que permitan el desenvolvimiento de las empresas del área social y privada.

Se señalaba a su vez la prioridad de la importación de repuestos; las divisas y su utilización sólo en adquisiciones vitales para el país; libre acceso al crédito para empresas privadas y mixtas; distribución equitativa de artículos de subsistencia vía organismos legales y por canales de entidades especializadas.

En el punto 14 se señalaba que se debía mantener la inexpropiabilidad de las 40 hectáreas básicas y la regularización de la propiedad privada a aquellos que habían sido asignados. El punto 15 apuntaba a la uniformización de la política de remuneraciones en el sector social y en las empresas del área social. Se aconsejaba también limitar las actividades de la Corfo y terminar con la práctica de empresas del área social que entregan parte de la producción a sus trabajadores.

Se trataba ni más ni menos de un nuevo programa de gobierno.

El Memorándum ponía énfasis en la independencia de los poderes del Estado y el cumplimiento de las garantías constitucionales. Abogaba por el entendimiento de los chilenos por encima de banderías políticas, el robustecimiento del principio de autoridad, el ordenamiento de las actividades laborales así como la aplicación irrestricta e indiscriminada de la Ley de Control de Armas. El Memorándum fue el basamento en el cual se fundamentó ante las FFAA el pronunciamiento militar.

Nicanor Díaz Estrada lo diría tiempo más tarde : “La decisión de dar el golpe se tomó a mediados de julio de 1973”.

Y por supuesto la CIA estaba informada minuto a minuto. Nuevamente la estación de Santiago informa a Washington el 25 de julio que :” Los oficiales conspiradores de las FFAA esperan que la huelga de los dueños de camiones programada para el 26 de julio sea programada para que el Consejo de los 15 pueda terminar un plan anti insurgencia que podría emplearse como base para un golpe de Estado”. Por esta razón, el almirante Carvajal trató que León Villarín, presidente de los camioneros postergara la huelga hasta que el plan estuviera terminado”.

Bonilla recadero de la DC y Frei, le comunicó en esos días de julio al general Prats, que Frei pensaba que la DC podría entenderse con el gobierno si éste aceptaba un gabinete cívico-militar, cosa que Prats consideraba impracticable porque significaba hacer de lado a la UP.

El tiempo se aceleraba en ese mes de julio de 1973. Prats se reunió entonces con los dirigentes del PS, Altamirano, Ariel Ulloa y Rolando Calderón, instándolos a buscar un acuerdo con la DC para evitar el golpe. Pero los dirigentes del PS consideraron que el golpe ya estaba en marcha y que había que neutralizarlo (¿cómo?) o enfrentarlo (¿con qué?)

Prats había iniciado una carrera contra el tiempo y esa misma tarde de julio se reunió con el ministro Flores, Luis Figueroa y Rolando Calderón de la CUT. Estos le expresaron que estaban dispuestos a defender al gobierno de consuno con los militares leales. Prats sostiene en sus memorias que un enfrentamiento de las FFAA con “masas inorgánicas” conduciría a una matanza de proporciones insospechadas.

El 3 de julio el Presidente Allende había convocado a los comandantes en jefe de las instituciones armadas y les planteó que la única manera de detener el golpe era la incorporación de militares a un nuevo gabinete. A pesar de la oposición de varios generales del Ejército, tanto el comandante de la Fach, César Ruiz como el almirante Montero aceptaron su integración al gabinete. Pero luego, en una reunión del Cuerpo de generales del Ejército, algunos de ellos objetaron la presencia de militares en el gabinete. Bonilla dijo estar de acuerdo con la incorporación de Prats a título personal. Nuño, leyó parte del “Memorándum secreto” diciendo que se oponía a la presencia de militares en el gabinete. Pickering estuvo de acuerdo con lo expresado por Nuño y advirtió que si se realizaba la voluntad del Presidente Allende, él se retiraba del Ejército. Intervención importante por cuanto Pickering pasaba por ser un constitucionalista. En sus memorias el general Prats narra que tanto Bonilla como Araya le expresaron que dimitiera de la Comandancia en Jefe y aceptara el puesto en el gabinete como general en retiro. Los conspiradores sabían que la verticalidad del mando, en la cúspide de la cual se encontraba Prats, hacían difícil un golpe sin contar con la anuencia de la cabeza del Ejército.

El 4 de julio los generales Urbina, Bonilla, Sepúlveda y Pickering concurren a La Moneda donde se enteraron que la Armada y la Fach habían aceptado ingresar al gabinete. Sin embargo, el Ejército no aceptó. Pickering quedó muy herido por las palabras del Presidente que responsabilizó al Cuerpo de Generales por las consecuencias de la negativa del Ejército, que podría dijo, llevar al país a una guerra civil. El Presidente nombró un nuevo gabinete presidido por Carlos Briones, PS moderado.

Por su parte, Prats reunió a los generales Pinochet, Urbina, Sepúlveda, Pickering, Contreras y Brady, para recalcarles cuál era la política institucional que había que llevar adelante. Escribe Prats en sus Memorias: “Fijo un plazo de 10 días para que cada comandante y director se responsabilice del adoctrinamiento del personal de acuerdo a las ideas expuestas. El Coronel Nilo Floody, director de la Escuela Militar pregunta: ¿cómo se actuará contra el marxismo? Le respondo que no habrá gobierno marxista mientras la libertad de sufragio y los Poderes del Estado ejerzan su potestad constitucional.” Lo que al parecer no sabía Prats era que el Coronel Floody ya se había sumado a la conspiración, coordinada por el vicealmirante Patricio Carvajal.

Más tarde, en ese mes de julio Prats asistió a una reunión para discutir el informe de inteligencia de las FFAA. Según esta instancia, la UP y sus partidarios almacenaban armas. Carvajal reiteró que había que aplicar drásticamente la Ley de Control de Armas. Prats aprobó, pero desconocía que la CIA consideraba estos allanamientos como el “plan anti-insurgencia que podía ser utilizado como base del golpe de Estado, que el almirante Carvajal coordinaba. En la Armada el plan era conocido como “Plan Cochayuyo”.

Salvador Allende remodeló el gabinete y nombró a Clodomiro Almeyda como ministro de Defensa, éste recibió el “Memorándum secreto” redactado por el Comité de los 15. Dicho documento era una abierta transgresión de la obediencia y no deliberación de las FFAA. Pero ni Salvador Allende ni su ministro

Almeyda atinaron a reaccionar.

Ese mes de julio, que retrospectivamente puede ser considerado como el más importante en la óptica del engranaje conspirativo, un general -Araya- planteó la necesidad de reestructurar el Alto Mando. En esas semanas el general Pickering había presentado su expediente de retiro varias veces y otras tantas dicho expediente fue rechazado por la superioridad del Ejército. Pickering contaba con el aprecio de generales constitucionalistas y del otro bando por su impecable cometido profesional.

También el Presidente agilizaba sus reuniones, particularmente con el hombre que en Ejército mantenía su liderazgo y garantizaba la verticalidad del mando así como la lealtad de la institución castrense hacia el gobierno, el general Carlos Prats. El Presidente quería saber por boca de Prats si se podía contar en esos momentos -estamos a más de la mitad del mes de julio de 1973- con unidades leales y de alto poder de fuego, capaces de actuar en defensa del gobierno. El general, fiel a su línea de conducta le expresó que lo fundamental para evitar el golpe era intensificar el diálogo y los contactos con la DC. Allende consideraba que ello no fructificaría pero le pidió hablara con Frei, líder de la DC y Presidente del Senado.

De la discusión habida entre Prats y Frei resulta que este último aceptaría un entendimiento con el gobierno, agregando que siempre la DC ha estado llana a ello pero considera que las garantías mínimas eran la disolución de los grupos armados y la existencia de un gabinete que pusiera orden en el país. Ni más ni menos que lo escrito en el Memorándum del Comité de los 15. Prats se retiró entonces sin lograr el acuerdo preciso que buscaba.

En su carrera por encontrar puntos de apoyo, el general Prats se entrevistó con Miguel Enríquez del MIR quien le confirmó lo ya Prats sabía: unidades militares habían intentado apoyar el “tanquetazo”, que los generales Bonilla, Arellano y Bravo tenían lazos con la DC y que el primero, Bonilla, le había recordado a Frei que en tanto Presidente del Senado pasaría a ser Jefe de Estado en caso de vacancia en la Presidencia. Bonilla le habría señalado a Frei que las FFAA esperaban una acusación constitucional exigiendo la dimisión de Salvador Allende. De no haber un acuerdo político con la DC, Prats escribió: “Veo inevitable el enfrentamiento...del que emergerá una draconiana dictadura militar o una terrible dictadura proletaria”. Alrededor del 19 de julio, Pinochet le informó a Prats que en una reunión de 15 generales se habían planteado “inquietudes”, encubiertas para no alertar al comandante en Jefe.

El 25 de julio, la Confederación de Dueños de camiones anunció un paro indefinido. Horas antes Roberto Thieme, el entonces clandestino dirigente de P y L, se reunió en Vitacura a petición del brazo derecho del almirante Merino, el comandante de la Armada Hugo Castro quien le dijo: “Mire Roberto, el paro va con todo, vamos a paralizar todo el país, esto no va a ser un nuevo Paro de Octubre, esto va en serio y queremos que ustedes contribuyan a hacer una campaña de sabotaje que nosotros les vamos a indicar”.

Al día siguiente, el 26 de julio de 1973 se celebró en la Embajada de Cuba el vigésimo aniversario del asalto al Cuartel Moncada. Concurrió el Presidente Allende, civiles y militares, Pinochet, representantes diplomáticos, ministros y dirigentes políticos. El edecán aéreo de Salvador Allende Roberto Sánchez y su edecán naval, Arturo Araya Peters. Sería su última velada entre amigos. Horas después, en el curso de una asonada organizada por las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales de Patria y Libertad y monitoreada por la Armada, cayó herido de muerte en el balcón de su apartamento de calle Fidel Oteiza en Providencia, el edecán naval Araya Peters.

Julio terminaba ensangrentado anunciando así, nuevos y luctuosos acontecimientos.

Nº5 Agosto 1973

A fines de agosto de 1973, ante el clima conspirativo existente en el país y las profundas divisiones en la sociedad chilena, el primado de la Iglesia, Cardenal Raúl Silva Henríquez, hizo un último llamado al diálogo y al necesario entendimiento de las diferentes fuerzas políticas, destinado a impedir el desencadenamiento de la violencia y del golpe militar en ciernes, que desde el « Tanquetazo » del 29 de junio avanzaba a raudo paso entre sectores civiles y que había seducido a vastos sectores de la oficialidad de las FFAA. Decía Silva Henríquez : » La gran mayoría de los chilenos tenemos hambre y sed de justicia...A los grupos políticos y sociales de gobierno y de oposición les imploramos que den los pasos necesarios para crear las condiciones de un diálogo que haga posible un entendimiento ».

Desde el asesinato del edecán naval del Presidente Allende se había verificado que la oficialidad derechista pasaba abiertamente a la insurrección, sobre todo en la Armada, donde conspicuos oficiales ya habían abrazado la causa del golpe de Estado. El grotesco episodio montado por la CIA para culpar del asesinato del comandante Araya a un electricista allendista que trabajaba en la Corfo, José Luis Riquelme Bascuñán, detenido en la vía pública por ebriedad, operación de inteligencia y desestabilización monitoreada por la CIA y que contó con la connivencia de oficiales que participaban en la conspiración (Nicanor Díaz Estrada, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional), el jefe de la Contrainteligencia de Carabineros, Germán Esquivel Caballero (quien pasaría con posterioridad a formar parte del Comando Conjunto y moriría años más tarde en condiciones no elucidadas), amén de políticos DC y del PN, así como de P y L clamaban la intervención militar para poner fin al “gobierno marxista de Salvador Allende”, que había osado atentar a la vida del edecán, un marino ejemplar decían los conspiradores. Las flagelaciones, torturas y apremios infligidos a Riquelme Bascuñán, lo llevaron a auto inculparse e implicar además a funcionarios cubanos de la Embajada de ese país y a Domingo Blanco Tarrés (« Bruno ») del GAP.

La intervención pública radial del general constitucionalista de Carabineros, el Prefecto Fabián Parada, echó por tierra el burdo montaje urdido por la CIA y los conspiradores : « Les habla un general de Carabineros. Yo no he informado al Presidente de la República que tenemos un detenido por el asesinato del comandante Araya (se refería a Riquelme Bascuñán). Eso es totalmente falso...Para estas canalladas que se propalan por la radio yo no me presto... »

Los conspiradores tenían también adeptos en el medio judicial. El fiscal militar Joaquín Earlbaum y el Ministro de la Corte de Apelaciones Abraham Meerson -el mismo que había liberado rápidamente en 1970 a varios implicados en el atentado al general Schneider.

Alfredo Joignant, director de Investigaciones y Hernán Romero, Prefecto, funcionario de carrera, más bien de derecha y muy considerado en círculos policiales, descubrieron en pocos días el hilo oculto de la madeja que llevaba directamente a P y L, oficiales en activo de la Armada y a la CIA. « He hecho muchas investigaciones en mi vida, pero ésta es la más difícil de todas : vamos a tener en contra a los servicios de inteligencia militar y a la CIA ».

Finalmente comenzaron a caer detenidos los participantes directos o indirectos del asesinato del comandante Araya : Mario Rojas Zegers de P y L y algunos que se habían entregado por su propia cuenta al Fiscal naval Aldo Montagna. Estaban implicados varios otros militantes de P y L (Guillermo Claverie Bartet, Mario Necochea Aspillaga, Uca Eileen Lazcano, Guillermo Schilling Rojas, Luis César Palma Ramirez, Odilio Castaño Jiménez, Guillermo Bunster Titsch). Este ultimo confesaría con posterioridad al golpe que las armas recibidas para provocar el caos en Providencia la noche del 26 de julio, habían sido entregadas por el ex cadete de la Escuela Naval Jorge Elhers (fugado en 2003 a Alemania cuando los hijos del comandante Araya interpusieron en su contra una querrela). Este había convocado a los militantes de P y L la noche del asesinato : « Habrá un operativo..La Marina se deja caer sobre Santiago...Debemos sembrar el caos y ayudar a las fuerzas navales, disparar a micros incluso con pasajeros a bordo ». El arma que sirvió para asesinar al comandante Araya, era una metralleta Bataan, traídas de contrabando desde Argentina por Miguel Cessa y Roberto Thieme. Esta arma que efectuó el disparo mortal nunca ha sido hallada. « A su padre, le confidenció al hijo de Arturo Araya Peters un ex policía de Investigaciones, hoy jubilado, pero que participó en la

investigación de entonces- lo mató un tirador escogido, desde una casona que era un colegio de monjas ».

Por su parte, Roberto Thieme que tenía a su cargo « los grupos operacionales » de P y L y colaboraba con oficiales de la Armada, explicó años después : « Entre los crímenes que se le atribuyen a P y L hay dos o tres que son accidentes, la muerte del pintor Jorge Henríquez González de Canal 5 en Concepción y el atentado al oleoducto de Curicó (dos muertos y catorce heridos). Fue por ignorancia, no por querer matar gente. En lo que respecta al comandante Araya, cómo iba yo a mandar matar al edecán del Presidente cuando estaba trabajando con la Armada ? En las muertes del general Schneider y Pérez Zujovic, está la CIA detrás. Jorge Ehlers, ex cadete, entrega armas esa noche, comprometiéndome, porque esas armas yo las había traído de Argentina. La muerte del comandante Araya es obra de la CIA...no fue un accidente ». La operación de desestabilización llevada a cabo por la CIA y oficiales de la Armada tenía como objeto eliminar a un marino constitucionalista que dentro de poco debía acceder al Almirantazgo.

Este asesinato intervenía justo en el momento en que la Iglesia Católica desplegaba ingentes esfuerzos por lograr un diálogo entre el gobierno y la DC. Con el fracaso el 2 de agosto del diálogo entre el Presidente Allende y Aylwin, los civiles y oficiales golpistas se frotaron las manos. Agradó sobremanera al vértice que coordinaba la conspiración y al vicealmirante Patricio Carvajal que ese mismo día se regocijó con la noticia del relevo del ministro de Defensa José Tohá. Fue entonces cuando el senador DC Renán Fuentealba envió un mensaje a Salvador Allende diciéndole que no debía confiar en Aylwin, puesto que estaba comprometido con la conspiración en curso.

En el mes de los gatos, agosto, ambos bandos se hacían ímprobos esfuerzos por, de un lado, apurar la decisión de llevar a cabo un golpe de Estado y por parte del gobierno, resistir e impedir el desencadenamiento de la violencia y la intervención militar.

El fracaso de este diálogo cedió el paso a la cuenta regresiva ya programada por los mandamases de la conjura.

Nixon se inquietaba en Washington por la demora en la acción militar prevista. El jefe de la estación de la CIA en Santiago le envió un cable explicativo :”Si Allende es capaz de restablecer el control sobre la UP, si logra convencer a sus dirigentes de la necesidad de un compromiso destinado a reducir las tensiones políticas y evitar la confrontación, la actitud final de la DC será clave para el éxito de esta salida...Hay un pequeño sector DC que desea continuar el diálogo con el gobierno, pero la situación dentro de las FFAA es muy grave, luego del 29 de junio, la oficialidad superior se ha visto obligada a asumir un papel activo en la elaboración de planes para presionar a Allende o derrocarlo. Pero las FFAA y la Armada no actuarán hasta que el Ejército se decida a actuar...Mientras el comandante en jefe Carlos Prats, el comandante de Institutos militares Guillermo Pickering y el jefe de la guarnición de Santiago Mario Sepúlveda no adhieran al golpe militar, éste no tendrá éxito”. El obstáculo mayor era el general Prats y la verticalidad del mando.

El 7 de agosto la Armada denunció que se había detectado un movimiento subversivo en dos unidades de la Escuadra, en el crucero Almirante Latorre y en el destructor Blanco Encalada, en connivencia se anunció, con “extremistas ajenos a la institución”.

Desde el 29 de junio la Inteligencia Naval había detectado a un grupo de suboficiales y marineros que manifestaban discretamente su oposición al golpe y se habían organizado para, adelantarse a los oficiales golpistas y apoderarse de los buques o hacer frente a un intento golpista de los oficiales quienes no se privaban de hacer saber sus opiniones al respecto. El 5 de agosto fue detenido el sargento Juan Cárdenas sobre el cual recayó la acusación de ser la cabeza del movimiento que tenía ramificaciones en otras unidades de la Escuadra (cruceros Prats y O'Higgins) y en la Escuela de Ingeniería y de Telecomunicaciones de la Armada. Torturado así como los cabos Blaset, Lagos, Roldán, Aravena, Domínguez y decenas de marineros (Velásquez, Zúñiga, Aguirre, Maldonado, Cordero, Carvajal, Ruiz, Claros, Valderrama, Ibarra, Ayala, hasta un delator, Araneda), el sargento Cárdenas asumiría con entereza la responsabilidad de todo el movimiento. La Armada acusaba a los suboficiales y marineros de querer tomar el control de los buques y haber participado en reuniones con civiles del MIR (Miguel Enríquez), Mapu (Garretón), y PS (Altamirano). Dichos políticos se manifestaron escépticos en cuanto a la factibilidad del plan esbozado por los marinos.

Varias decenas de tripulantes fueron detenidos y torturados salvajemente. A pesar del pesado silencio que cubrió dichos acontecimientos, por parte de las autoridades navales pero también por los partidos de gobierno, salió a luz la ignominia del trato dado por la marina a sus marineros. La mujer del sargento Cárdenas denunciaba en Radio Portaña de Valparaíso estos hechos explicando :”No querían que los utilizaran para llevar a cabo un golpe de Estado...Mi marido estaba también preocupado por Jakarta, porque los planes de la oficialidad eran eliminar a mucha gente”. Antes que terminara la emisión (26 de agosto), infantes de marina allanaron la Radio deteniendo a dos periodistas de la emisora. Era agosto de 1973 y teóricamente el estado de derecho estaba vigente y gobernaba en Chile una coalición de izquierda, la UP y a la cabeza del gobierno se encontraba el Presidente Salvador Allende. Posteriormente, en declaraciones a la prensa los marineros refutarían la acusación de sedición pensando que era justo y legítimo defender la institucionalidad vigente. La sedición estaba del otro lado, en la oposición civil y el Alto Mando Naval, oficiales que con todo desparpajo acusaban a los marineros de “Sembrar dudas sobre el comportamiento constitucional de la marina, agravio al honor de nuestra institución”.

Cerca de 200 marinos fueron detenidos desde agosto de 1973. La Armada refutó las acusaciones de malos tratos y torturas de manera sistemática. 92 marinos fueron condenados a penas de prisión de 3 a 8 años. Muchos, una vez cumplida la pena debieron abandonar el país debido al hostigamiento y acoso del SIN. Dos marinos, Ernesto Zúñiga y Alberto Salazar, decidieron quedarse en Chile participando activamente en la resistencia a la dictadura. Ellos constituyen un ejemplo y una reserva moral que no ha sido suficientemente saludada.

El 7 de agosto el almirante Merino denunció la subversión, fomentada por los marineros con el MIR, el PS y el Mapu, que habían intentado expresó sin sonrojarse “dar un golpe en la Armada”.

El sargento Cárdenas, brutalmente torturado por la marina en pleno gobierno de la UP, se declaró como dijimos único responsable del movimiento antigolpista. Permaneció 13 años recluso. EL MIR, el Mapu y el PS, más de manera remolona algunos partidos de la UP, denunciaron estos hechos y el comportamiento incalificable de los oficiales golpistas, pero algunos partidos mantuvieron un más que discretísimo silencio público, más aún un diario de un partido de un Comité Regional de Concepción, recogió la monserga y acusó a los marineros de “subversivos”. También fueron desafortunadas las declaraciones públicas de Salvador Allende, avalando los dichos de la Armada que denunciaban un “movimiento subversivo en la marina”. Ello resulta más sorprendente cuando se sabe que algunas reuniones entre marinos y políticos se llevaron a cabo en la casa de Laura Allende, hermana del Presidente.

Durante el mes de los gatos el cuerpo de generales del Ejército había arremetido contra la idea de la participación de uniformados en el gabinete del Presidente Allende, salvo si el gobierno accedía a nombrar a 2/3 de ministros provenientes de las FFAA en puestos relevantes. Prats desconfiaba y consideró que se estaba proponiendo un “golpe seco”, a la uruguaya. Desde el 9 de agosto los oficiales que llevaban el panderero en la conspiración acentuaron su acción conspirativa, el general Arellano escribió en sus memorias :”La guerra está declarada! Ahora sólo cabe la decisión de derrocar al gobierno, después del fracaso de las conversaciones con la DC, además de la subversión en la marina...No podemos esperar más tiempo como espectadores, están en juego los altos destinos de la Patria”. El 17 de ese mes, el general Arellano afinó los detalles del plan de telecomunicaciones para la Defensa Nacional, clave para el golpe. Días antes, el 9 de agosto, el Presidente Allende había tomado juramento al gabinete de “la última oportunidad”, dijo. El MIR lo calificó duramente: “gabinete de capitulación”,

Durante ese mes, P y L declaró que la “tregua había concluido”, con el paro de transportistas alentado por la conspiración civil. Sin embargo, el Cardenal Silva organizó una reunión de Aylwin y el Presidente Allende el 17 de agosto. Aylwin expuso las exigencias para poner fin al paro y devolver tranquilidad al país : acuerdo sobre la delimitación de las áreas de la economía, reintegración de los mineros despedidos de la mina El Teniente, reajuste de precios para la Papelera (para ello se designó una comisión, Víctor Pey por el gobierno y Sergio Molina por la DC)

Ese mismo día el general César Ruiz Danyau presentó su renuncia al cargo de ministro al Presidente Allende, pero éste último le pidió que dimitiera también de la Comandancia en Jefe de la FACH. El cuerpo de generales de la FACH no estuvo de acuerdo y Allende nombró como Comandante en Jefe a Leigh, aceptando nombrar en el ministerio de Obras Públicas al general Humberto Magliocchi.

La estación de la CIA mantenía informado de todos los detalles a Washington. En un cable fechado ese día el agente estadounidense expresa :” La estrategia de la UP quiere lograr un control total de la producción del país, unido al apoyo popular y al control de sectores claves del Ejército (Santiago), le daría un poder suficiente para enfrentar con éxito la amenaza de sus adversarios. Esto debe ser impedido considera la oposición, por eso que con la anuencia del mando de la conspiración, propugnan una huelga nacional general y acusaciones al Presidente y a todo el gabinete en el Parlamento.

El 23 de agosto la Cámara de Diputados votó mayoritariamente una declaración de ilegitimidad del gobierno. Días antes, se había producido una manifestación de mujeres de generales ante el domicilio del general Prats quien se encontraba con gripe. Poco a poco se fue reuniendo, aparte de las esposas de los generales, militares en servicio activo y en retiro, un número de unas 1500 personas, manifestación que buscaba deslegitimar al general Prats, el último escollo en el Ejército para el éxito del plan golpista. Las mujeres eran portadoras de una carta dirigida a la mujer de Prats, rogándole intercediera para que éste pusiera término “al descalabro en que se encuentra el país”. Entre ellas estaban las esposas de los generales Baeza, Palacios, Bonilla, Vivero, Nuño, Cano, Arellano, etc. Era un cobarde agravio infligido a Prats. Este recibió el apoyo y solidaridad de Pinochet, Pickering, y del Presidente Allende, quien ordenó a Carabineros despejar el lugar.

Este episodio mostraba públicamente el distanciamiento de la mayor parte de los generales con Prats, puesto que a la reunión convocada por Pinochet para el día siguiente, los generales cuyas mujeres habían participado en el agravio, fueron remolones a presentar sus disculpas a Prats. Pinochet los increpó con dureza diciendo que se había atentado contra la disciplina y que habría sanciones, agregando en tono intimidatorio :”Esta afrenta se lava con sangre de generales!” y anunció el llamado a retiro de 3 generales. “Las señoras de algunos generales se han comportado como unas verduleras”, concluyó Pinochet.

En sus memorias el general Prats escribió : “No me cabe duda que los generales buscan liberarse de los obstáculos que les impiden un pronunciamiento político institucional -el retiro de los generales Pickering y Sepúlveda, los dos generales con mando más íntegros y que me han acompañado estos ocho meses y que fueron fuerzas claves cuando el amotinamiento del Blindado n°2, me deja sin intermediarios incontaminados por la pasión política. Intenté disuadirlos de dimitir, pero no he sido convincente ¿cómo se puede mantener la disciplina en la oficialidad media y subalterna, claramente perturbada por la acción de la oposición que los ha llevado al paroxismo? Es preferible que me vaya yo, que ya he jugado mis últimas cartas y no ellos que son una esperanza del mantenimiento del profesionalismo prescindente y con porvenir institucional”. Respondiendo a Pickering y Sepúlveda afirma que para restablece la disciplina en el Ejército se debía llamar a retiro a 12 o 15 generales y esto provocaría una guerra civil. Esa tarde, Carlos Prats presentó su renuncia al Presidente Allende, de su cargo de Ministro de Defensa y Comandante en Jefe del Ejército.

Días antes, la Cámara de Diputados había votado la declaración de ilegitimidad del gobierno. Era un abierto llamado a intervenir a las FFAA. Se acusaba al gobierno de violar las atribuciones de otros poderes del Estado, las garantías otorgadas por la Constitución, amparar la creación de poderes paralelos ilegítimos, atacar a la Corte Suprema, utilizar “resquicios legales”, la no promulgación de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, atropello a la libertad de expresión, violación de la autonomía universitaria, de la libertad de enseñanza, del derecho de propiedad, de los derechos de los trabajadores. En fin, un florilegio de embustes lanzados a diestra y siniestra.

La conspiración quería darle un barniz de legalidad al golpe y efectivamente, esta declaración sería utilizada para justificarlo (Bando n° 5) en el país y en el extranjero. Dicha declaración fue repudiada por varios diputados y dirigentes DC, entre ellos Leighon, Fuentealba, Donoso. El 23 de agosto, el Presidente Allende convocó a Pinochet junto a diez generales por él elegidos. Lo acompañaban los generales Urbina, González, Pickering, Sepúlveda, Se trataba de una cena en la residencia de Tomás Moro. Antes de ser asesinado en Washington, Orlando Letelier recordaría que Pinochet en esa ocasión alardeaba de su lealtad al Presidente y de su amistad con Prats. Por su parte Allende quería saber las razones de la dimisión de Pickering y Sepúlveda.

Ya en la tarde, el general Prats había comunicado al general Leigh y al almirante Carvajal que había

dimitido. Tanto el uno como el otro disimularon su satisfacción. El mayor escollo que existía en el Ejército para el éxito del golpe se había autoeliminado.

El 24 de agosto, el general Prats escribió una carta al Presidente Allende. Este reestructuró su gabinete : Letelier (PS) Defensa, general Rolando González Minería, Obras Públicas general Humberto Magliochetti, Hacienda almirante Daniel Arellano, Tierras y Colonización general José María Sepúlveda Galindo. Mientras tanto habían surgido problemas con algunos generales quienes se negaban a presentar sus expedientes de retiro : Javier Palacios, Sergio Arellano, Arturo Vivero, Oscar Bonilla, Nuño, justamente aquellos que se situaban a la cabeza de la conspiración.

En la carta-renuncia de Prats dirigida a Allende, este había escrito :”Cuando comprendí que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad, he estimado un deber de soldado de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del estado de derecho ni de servir de pretexto a los que buscan el derrocamiento del gobierno. Me permito presentarle mi renuncia indeclinable a mi cargo de Ministro de Defensa Nacional y solicitarle mi retiro de las filas del Ejército al que serví con el mayor celo profesional durante 40 años”.

Las puertas del Ejército quedaban así abiertas para el golpe que se venía gestando, puesto que se había autoeliminado el último escollo institucional.

Nº6 Septiembre 1973

El mes de la Patria se iniciaba en Chile bajo negros presagios. La conspiración en curso no había logrado aún solucionar los problemas institucionales mayores que dificultaban los preparativos golpistas iniciados hacía meses: el nombramiento de Merino como Comandante en Jefe de la Armada en reemplazo del almirante Montero y la decisión clara de Pinochet -ya Jefe del Ejército- de participar en el golpe. En el Alto Mando Naval la correlación de fuerzas era clara : aparte del almirante Montero, los contralmirantes Daniel Arellano y Hugo Poblete Mery, más algunos oficiales subalternos, la inmensa mayoría de la oficialidad conspiraba desde hacía meses y consideraba con temor la permanencia del almirante Montero a la cabeza de la Marina, aun si el golpe era apoyado cada vez más abiertamente por oficiales navales, quienes tenían estrechas relaciones con la Inteligencia estadounidense, como lo denunció años después a un periódico británico el general Carlos Prats. Se trataba del coronel norteamericano Ryan. Esta intervención fue narrada en la famosa película Missing de Costa Gavras, donde se relata la ejecución y desaparición de dos jóvenes estadounidenses, Charles Horman y Frank Teruggi, quienes habían descubierto los lazos entre oficiales de la inteligencia naval de ese país y oficiales golpistas chilenos en los preparativos del golpe.

Se hacía necesario que Merino, una vez decidida la fecha del golpe, gozara del título formal de Comandante en Jefe de la Armada, como ya lo eran, Pinochet y Leigh de sus instituciones respectivas. Merino se sentía menoscabado con respecto a ellos.

El 1º de septiembre, acompañado del almirante Huidobro, Merino planteó al almirante Montero que el Consejo Naval estimaba que debía dimitir a su cargo. El ministro Letelier enterado de este desacato los increpó diciendo que la remoción de los altos mandos era facultad privativa del Presidente, recordándole a Merino que había sido él mismo quien le había manifestado su deseo de renunciar. Compungido, Merino afirmó que efectivamente deseaba acogerse a retiro. A fines de año, tanto Merino como Huerta cumplirían 40 años de servicio.

Distinta era la situación del almirante Montero quien ya había sobrepasado los 40 años de servicio pero, atribución presidencial, el Presidente Allende le había pedido se mantuviera en el cargo de Comandante en Jefe tres veces, desde 1970.

En la reunión de Letelier con el Consejo Naval surgió la ardorosa defensa del mando de la Armada que representaba el almirante Montero, de los contralmirantes Daniel Arellano y Hugo Poblete Mery, quienes criticaban las presiones de los otros almirantes que querían forzar la mano al gobierno e imponer a Merino.: “Ministro, aquí lo que se está planteando es un acto de insurrección inaceptable...dentro de la Armada se está alterando la disciplina...”.

Carvajal, también presente, trató de defender a Merino. Carvajal era una pieza clave en el dispositivo conspirativo -Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional- sabía que era mejor para el éxito del golpe, que Merino, tal como Pinochet y Leigh en sus respectivas instituciones, asumiera la Jefatura de la Armada.

Fue en esos días que el Presidente Allende comenzó a madurar su idea de convocar a un plebiscito y cogobernar con la DC. Era la única forma, dijo a sus más cercanos colaboradores (Garcés, Beatriz Allende, Arsenio Poupin, Claudio Jimeno, René Benditt) de impedir el golpe.

El 2 de septiembre comenzaron los ajetreos ligados al creciente malestar de la Marina por la no designación de Merino. Solo, ante la creciente adhesión de los oficiales a la conspiración que ya frisaba la cuasi insurrección, el almirante Montero dió prueba de entereza aun si su salud se quebrantaba a ojos vista. Orlando Letelier por su parte percibía perfectamente que Carvajal era quien coordinaba a los conspiradores en todas las instituciones castrenses. Montero parecía de acuerdo con la opinión de Letelier, pero aconsejó esperar la Junta de Calificación que debía tenerse a fines de ese año para pasar a retiro a Carvajal, Merino y Huerta. La firme actitud de Letelier y del almirante Montero, contrastaba con la del general Prats, quien como hemos dicho había renunciado a su cargo, posibilitado así el golpe en el Ejército.

La presencia de Montero, el anuncio del plebiscito que se proponía hacer el Presidente Allende, daban, se pensaba, un margen de maniobra, un respiro. El nombramiento de Merino en lugar de Montero era entonces un objetivo en la Armada, aun si la correlación de fuerzas en ella era abrumadora como hemos dicho en favor del golpe. La prensa golpista, financiada desde el extranjero (El Mercurio, Tribuna, PEC, etc) echaba leña al fuego, como el semanario PEC que publicó un artículo titulado “Allende, de nuevo entre la Marina y la pared”. Se explicaba ahí, que no se podía como en otras instituciones armadas, “dividir las para imponer la voluntad de La Moneda : ningún alto oficial aceptaría la Comandancia en jefe si ésta no se le ofrecía a Merino. Si de Allende dependiera, mantendría a Montero en su puesto hasta diciembre de 1973...Ese mes Merino y Huerta se acogen automáticamente a retiro. Pero las cosas han dejado de depender de Allende. En este instante quien corta el bacalao es la Marina”.

Montero sabía que el golpe era cuestión de días, pero no se amedrentó y siguió sirviendo como Comandante en Jefe hasta el mismo día del golpe, cuando su casa fue rodeada por infantes de marina, helicóptero, sus comunicaciones telefónicas cortadas y sus automóviles inmovilizados.

Por esos días, el Auditor naval Rodolfo Vío Valdivieso, conspirador de larga data, y a quien el Presidente Allende y Letelier habían encargado investigara la acusación de torturas a los marineros antigolpistas, presentó la petición de desafuero contra Altamirano y Garretón por “incitación a la sublevación”. Al mismo tiempo se acentuaron los paros de los transportistas, parte de cuyos camiones estaban aparcados en terrenos pertenecientes a la Armada desde hacía varias semanas. El dinero proporcionado por la CIA a las empresas chilenas era distribuido por la SOFOFA desde el mes de julio, dólares, que cambiados en el mercado negro se multiplicaban por 500% por sobre el curso oficial.

En los primeros días de septiembre se celebró el tercer aniversario del triunfo electoral de la UP en 1970. Ese martes 4 de septiembre, cuatro columnas convergieron hacia el centro de Santiago y el Presidente Allende las aplaudía y las alentaba junto a dirigentes de la UP. Las filmaciones existentes dan cuenta de las divergencias entre los manifestantes que coreaban : “Basta ya de conciliar es la hora de luchar”, además de las consabidas “Unidad y combate”, y “No a la guerra civil”.

Ese 4 de septiembre, Roberto Viaux Marambio abandonó el país rumbo a Paraguay condenado por extrañamiento por su participación en el complot para impedir en octubre de 1970, el nombramiento por el Congreso de Salvador Allende como Presidente de la República y que terminó con la muerte del general Schneider. Volvería a Chile años más tarde autorizado por la Junta Militar.

El 7 de septiembre Merino fue recibido por el Presidente Allende para fijar la fecha de entrega de la Jefatura de la Armada. El Presidente le dijo que esta se llevaría a efecto el 12 de septiembre, y no antes como quería la Marina, porque el gobierno no quería aparecer como inclinándose ante ella, según decían P y L y Tribuna. Merino arguyó que su institución tenía todo dispuesto para ese día, 7 de septiembre, pero el Presidente mantuvo el principio de autoridad y decidió postergar el nombramiento de Merino.

Contrariado, este llamó al almirante Huidobro quien era de opinión que Merino debía asumir el mando de todas formas y en tono amenazador dijo a Merino en un susurro que disponía de 3000 infantes de marina para forzar la mano del Presidente Allende.

Seguramente el plan de la conspiración y sus mandantes extranjeros no querían cambiar el calendario ya fijado, de ahí la insistencia de Huidobro. Finalmente, Merino se sometió a la decisión del Presidente y no insistió temiendo un desmadre de Huidobro y sus 3000 infantes de marina, que podría haber echado por tierra el plan que preveía el 11 de septiembre como día “D”, a las 6 am en Valparaíso y a las 8h30 en Santiago.

Era el viernes 7 de septiembre de 1973.

Ese fin de semana tuvieron lugar otras peripecias puesto que el día “D” ya estaba fijado. Pero la gran incógnita seguía siendo la participación en el golpe del general Pinochet. Se designó a Leigh para que comunicara a Pinochet lo que ya había sido decidido por los conspiradores.

Ese viernes 7 tuvo lugar también una importante reunión en la Escuela Militar a la que asistió entre otros, Arturo Yovane, articulador del golpe en Carabineros. También estaban presentes el coronel Nilo Floody, el coronel Fornet de la Fach y el capitán de navío Arturo Troncoso, lo que demostraba que los jefes de unidades -coroneles- ya habían sido puestos al corriente del golpe. Pero seguía en pie el “enigma Pinochet”.

El general Arellano insistió en que se debía considerar la participación de Pinochet. Se le encomendó hablar con él y en caso que se restara al movimiento castrense en curso, barajar la posibilidad de que asumiera en su lugar otro general, “sin hacer olas”. Hacía algunas semanas ciertos generales habían avanzado el nombre del general Manuel Torres de la Cruz, comandante de la división sur con asiento en Punta Arenas.

Otro problema y no menor lo representaba el generalato de Carabineros, en cuyo Alto Mando habían varios generales pro UP y/o allendistas : Sepúlveda Galindo, Urrutia, Parada, Alvarez, Salinas, y dos generales - Yáñez y Cádiz- quienes habían hecho saber a Yovane que no participarían en un intento golpista, pero juraron mantener silencio al respecto. En cambio, los generales Mackay y Contador, así como Mendoza (sexta antigüedad), adhirieron al golpe. Con la salvedad de que Mendoza no firmaría el acta de constitución de la Junta hasta no ver estampada la firma de Pinochet. Se le encomendó a Yovane neutralizar a los generales “pro UP”.

A diferencia del almirante Montero que enfrentaba a la ya casi declarada sublevación en la Marina, Prats, quien había renunciado a la jefatura del Ejército en agosto, sufría una depresión acentuada, y le confidenció a Orlando Letelier a menos de una semana del golpe : “Si el Presidente no toma medidas inmediatas antes del 14 de septiembre, se producirá un golpe de Estado”.

Según Letelier, Prats sabía que los generales Bonilla (logística), Arellano (Estado Mayor), Washington Carrasco (III división, Concepción), Héctor Bravo Muñoz (IV división, Valdivia), Torres de la Cruz (Punta Arenas,) conspiraban y soliviantaban a jefes de unidades. Sobre Herman Brady, de la guarnición de Santiago, masón y que hacía alarde de su amistad con el Presidente fue lapidario : “Yo no le tendría mucha confianza”.

El ministro Orlando Letelier del Solar, que aquellos días enfrentaba con entereza lo que sabía era una conspiración en ciernes y sólo había asumido su ministerio el 23 de agosto, en esa ocasión, poco días antes del golpe, expresó el general Prats que Pinochet tenía una actitud de lealtad para con el gobierno, “Pero - agregó- a él se le puede plantear el mismo problema de la renuncia como a tí te ocurrió. Si no, quiere decir que Pinochet está calculando y en un momento dado se va a plegar hacia el sector donde haya más generales y fuerza”. Con todo, expresó Prats :”Pinochet no estará entre los traidores”.

A sólo días del golpe, la Fach acentuaba la brutalidad de los allanamientos, que habían causado el asesinato de un trabajador en la Lanera Austral en Punta Arenas, a manos de la esa institución. Era una manera de acostumbrar a la tropa en las tareas de represión., tal como ocurrió en Santiago en la industria textil Sumar.

En esos días Prats recibió una zalamera carta de Pinochet. En ella escribía reafirmandole sus sentimientos de invariable afecto y amistad. : “Me dirijo no sólo al amigo sino al general que en todos los cargos que le ha correspondido desempeñarse lo ha hecho guiado por un superior sentido de la responsabilidad, tanto para el Ejército como para el país...”

El relato que Leigh y Arellano hacen de esos días -8, 9 de septiembre-es decidor y arroja luces sobre los generales involucrados en la conspiración, sobre su doblez y cobardía, diferente de la versión dada con posterioridad por Pinochet.

Durante varias horas durante aquellos días, tanto Arellano como Leigh trataron de hablar a solas con Pinochet. Les fue imposible ya que siempre este estuvo acompañado sea de su mujer o, por ejemplo, del general Orlando Urbina, segundo mando en el Ejército de quien se decía era constitucionalista, pero que como otros, se plegó a la mayoría de generales que apoyaron el golpe.

Leigh desconfiaba de él y cuando finalmente encontró a Pinochet en su casa el 9 de septiembre según cuenta posteriormente Leigh, el Jefe del Ejército le expresó que había que enviar a Urbina a Temuco con el pretexto de averiguar la existencia de un foco guerrillero. Pero en realidad el 9 de septiembre Pinochet junto a Urbina habían tenido otras entrevistas, que el jefe del Ejército se cuidó de revelar a Leigh.

Ese fin de semana a su vez, el Comité Ejecutivo de la UP se reunió porque debía pronunciarse sobre el llamado a plebiscito propuesto por el Presidente Allende.

En sus memorias, Orlando Millas, miembro de la CP del PC, que había sido ministro de Hacienda, escribe que el Presidente era pesimista en cuanto a la posibilidad de impedir el golpe. Aun cuando siempre había mantenido conversaciones con la DC, con Aylwin, gracias al ministro del Interior Carlos Briones. Contactó a su vez a Fernando Castillo Velasco para que éste sirviera de nexo con Frei y la DC. Pero Castillo Velasco sufrió un infarto.

Entonces intervino Orlando Millas que pujaba por un acuerdo con la DC, quien contactó a su primo DC Juan Gómez Millas, que había sido rector de la U de Chile y ministro de Educación de Frei. Gómez Millas habría propuesto una reforma constitucional a someter a plebiscito rápidamente (sobre las tres áreas de la economía), pero donde a su vez se incluía la convocatoria a una Asamblea Constituyente, electa como los diputados funcionando paralelamente que el Parlamento, con un plazo de un año para terminar sus trabajos.

Si el Presidente Allende aprobaba esta iniciativa, personalidades del ámbito universitario de diversa coloración política, encabezados por Gómez, emitirían una declaración aprobando dicha salida y proyecto, poniendo así fuera de juego el recurso a la fuerza. Por su lado, Frei, apoyaría públicamente dicha salida negociada.

Pero claro, quedaba el escollo del acuerdo político de la UP donde hubo obstáculos. El PC estaba de acuerdo así como el PR, la API y el Mapu OC. Pero el PS, el Mapu y la IC se opusieron a dicha iniciativa.

El Presidente Allende pensaba que de aprobar su proposición, se dispondría de tres años que quedaban de mandato presidencial y un año de discusión en la Asamblea Constituyente. El Presidente Allende creía que en esas condiciones la UP podía ganar la AC, lo creía posible. Y si el gobierno era derrotado, lo sería por un voto democrático y no por la fuerza de las armas y sus sangrientas consecuencias.

En el PS algunas voces se levantaron para decir que el Presidente exageraba la posibilidad del peligro de un golpe (Adonis Sepúlveda y Eric Schnacke) : “El Ejército no se comprometería con la derecha en un golpe”, puntualizó Schnacke. En caso contrario, se decía, habría un contragolpe.

Resulta realmente increíble que dirigentes teóricamente bien informados como Schnacke hayan podido sostener tamañas afirmaciones, que la situación real del país desmentía todos los días.

El Presidente Allende había trazado esas últimas semanas un plan tendiente, gracias al acuerdo con la DC a una salida política que evitara un baño de sangre. Sentía horror por la sangre derramada por otros, la suya le parecía tal vez un riesgo previsible, como lo había manifestado en repetidas oportunidades aquellos últimos meses.

El general Prats en sus Memorias escribe que el allanamiento de Sumar por efectivos de la Fach el 7 de septiembre habían sacado de quicio al Presidente y le dijo que llamaría el lunes 10 a un plebiscito : “Piensa que se perderá, pero será una derrota honrosa para la UP porque habrá una expresión mayoritaria del pueblo

que evitará la guerra civil”. Pensaba anunciarlo en un acto público al que debía asistir en la UTE de Santiago. Prats dice haberlo escuchado atónito ese 7 de septiembre en El Cañaveral, “puesto que implementar un plebiscito tardará varias semanas y el peligro de golpe es un asunto de días”. Pensaba, que incluso con la supuesta lealtad de Pinochet, “el mando sería sobrepasado”.

Curiosamente, esa tarde del 7 de septiembre de 1973, el Presidente Allende no fue la primera vez que reafirmó su confianza en la lealtad de Pinochet, pero aún más sorprendente resulta que también haya tenido confianza en Leigh, de quien se sabía era un conspirador notorio.

Ese día en El Cañaveral, Prats le dijo al Presidente Allende que pidiera permiso constitucional para ausentarse del país. Ante la furiosa mirada del Presidente Allende, Prats prefirió tragarse su proposición.

Antes de haber ido dicha tarde a El Cañaveral, Prats había visitado a Frei donde se dió cuenta, por sus propias declaraciones posteriores, que el golpe era ya inevitable.

El Presidente Allende había convocado el domingo 9 a Pinochet, Urbina y el presidente de la CUT, Luis Figueroa. Se trataba de coordinar un plan entre los trabajadores y los oficiales considerados leales del Ejército, para responder a una eventual asonada golpista.

En otro lugar de Santiago, Arellano buscaba denodadamente a Pinochet con el fin de comprometerlo en el golpe. Leigh se inquietaba por la tardanza de Pinochet en adherir a la intervención castrense.

También Arturo Yovane, el organizador del golpe en Carabineros había tenido el 7 de septiembre la misión de comprometer para cuatro días después, el Día “D”, a Mendoza, sexta antigüedad en Carabineros. Con él discutió la manera de neutralizar a los generales “allendistas”, pero como dijimos, Mendoza aún no firmaba su compromiso con el golpe, hasta que Pinochet no estampara su firma.

El 8 de septiembre Arellano había corrido todo el día tras de Pinochet tratando de ubicarlo. Lo encontró en su casa alrededor de las 21h y le explicó a grandes rasgos el plan y las fuerzas con las que creían contar.

El domingo 9, Carlos Altamirano pronunció en el Estadio Chile su famoso discurso donde admitía haberse reunido con los suboficiales y marineros antigolpistas, constitucionalistas.

Con posterioridad y para “cargar” a Altamirano se ha hablado de que este discurso habría servido de detonante y habría precipitado el golpe.

Ello no es cierto. Como hemos tratado de demostrar, el golpe se había preparado desde hacía meses y contaba con una evidente asesoría extranjera en las instituciones castrenses chilenas, particularmente en la Marina, como lo reconocen muchos implicados y víctimas de él, algunos de ellos como Roberto Thieme, Carlos Prats, además de las conclusiones de las Comisión Church que investigó la injerencia estadounidense en Chile.

Es significativo que muchas críticas dirigidas contra la actuación política de Altamirano -que por cierto caben- en este caso no se justifican, por cuanto el golpe fue el resultado de un conjunto de acciones políticas, militares y financieras iniciadas tanto en Chile como en el extranjero desde hacía meses cuando no años, y no fue un discurso encendido por muy inflamado que haya sido pronunciado 48 horas antes del golpe militar, la causa del golpe.

Dichas críticas provinieron inicialmente en gran parte del PC o de cercanos a dicho partido, que en parte se han mantenido en el tiempo. Tal vez es una manera de redimirse de las responsabilidades propias que le cupieron en el manejo de la “revolución chilena”. Recordemos que tiempo después, un alto jerarca del PCUS había sentenciado lapidario : “Una revolución que no es capaz de defenderse no merece llamarse revolución”.

Aún el domingo 9 de septiembre Pinochet no había confirmado a Leigh su participación en el golpe para el 11 de septiembre. Cuando finalmente se reunieron, llegaron los oficiales de la Marina -González y Huidobro-con la famosa carta de Merino donde se emplazaba a Leigh y a Pinochet a comprometerse con el golpe firmando aquel documento redactado por Merino precipitadamente.

Pinochet, había concurrido el domingo 9 acompañado por Urbina a una reunión con el Presidente Allende, quien quería saber el estado en que se encontraban las unidades donde se habían detectado preparativos golpistas. Esa misma tarde se recibió en Tomás Moro de fuente “fidedigna” que se había detectado concentración de tropas brasileñas en la frontera boliviana con Chile.

El 8 de septiembre, el cuartel general de la CIA recibió un despacho del jefe de la estación de Santiago : “La Armada ha programado una acción para derrocar al gobierno de Allende, la Fach apoyaría esta iniciativa...el almirante Merino, jefe de la I° Zona Naval, está tratando de postergarla para el 12 de septiembre fecha en la cual espera ya haber sido nombrado Comandante en Jefe de la Armada”.

Muy bien informado estaba el jefe de la CIA en Santiago quien se permitía además informar a su cuartel general en EEUU de cuáles serían las primeras medidas de la Junta Militar : “ La Fach silenciará las radios gubernamentales y prevé el establecimiento de una red o cadena nacional de emisoras de las FFAA y Carabineros a partir de las Radios Balmaceda (DC), Minería y Agricultura (SNA y derecha). El general Arturo Yovane ha garantizado el apoyo de la Escuela de Carabineros, los Servicios Especiales y la guardia del Palacio de La Moneda...El golpe se iniciaría el 10 de septiembre...”

Sin embargo, luego la CIA puntualizaba que el plan podría ser suspendido si el Presidente Allende dimitiese, llamase a plebiscito o anunciara la formación de un gabinete 100% compuesto por militares...”Ello produciría una postergación del golpe”, concluía la estación de la CIA de Santiago, agregando que el Presidente Allende “Tiene todavía un margen para maniobrar : podría frustrar el intento de los conspiradores si acogiera o aceptara las demandas de las FFAA y el PDC”.

Curiosamente, el viernes 7 de septiembre, Nathanel Davis, embajador de EEUU, había informado al ministro Letelier que debía viajar inmediatamente a Washington convocado por Kissinger, pero que volvería el 12 de septiembre puesto que Orlando Letelier y Davis habían fijado cita para ese día.

Este último cuenta que cuando llegó a Washington, Kissinger lo recibió con una exclamación : “Finalmente el golpe ya está en marcha en Chile!”

En la mañana del domingo 9 el Presidente Allende se reunió con la dirección del PC (Corvalán, Díaz y Millas). Les informó que no sería desleal con su partido y que esperaba que el PS aportara su apoyo a la iniciativa de su llamado a plebiscito. Si fuésemos derrotados les expresó, “el movimiento popular debe continuar. Yo estaré en mi puesto y ustedes en el suyo. La Historia de Chile no termina con la Presidencia de Allende”. El PC designó a Enrique París como su contacto con el Presidente.

Desde esas horas, el gobierno había tomado algunas medidas de protección (más de 1000 carabineros suplementarios reforzarían Santiago), medidas que resultarían irrisorias, tan grande era la desproporción de poder de fuego que se abatiría en contra del gobierno del Presidente Allende : Marina, Aviación, Ejército y Carabineros.

Ese domingo 9, en primeras horas de la tarde, Pinochet se encontró por última vez con el Presidente. El general reafirmó el pleno respeto del Ejército a la autoridad del Presidente, agregando que no creía que ni la Armada ni la Fach pudiesen intentar un golpe sin contar con el Ejército. El Presidente le contó entonces a Pinochet su intención de llamar a plebiscito.

De su lado, Arellano se inquietaba cada vez más, conocedor de la máxima militar que es más angustiante la víspera de la batalla que la batalla misma. Por la noche tres conspicuos personajes habían llegado a su

domicilio : Jorge Fontaine Aldunate, presidente de la SOFOFA, Juan de Dios Carmona, senador DC y el coronel retirado Alberto Labé, todos, conspiradores de larga data.

Luego, con los generales Vivero y Nuño, afinó detalles para el día siguiente.

A medianoche el gobierno fue informado de que los buques norteamericanos que tomarían parte en la operación Unitas habían llegado a las costas de Valparaíso.

Sólo a las 13 h del 10 de septiembre Pinochet fue reconocido oficialmente como jefe de los golpistas, alrededor de un almuerzo en el ministerio de Defensa. Estaban junto a él los generales Leigh, Bonilla, Brady, Benavides, Arellano y Palacios. Discutieron luego del almuerzo sobre la acción que se llevaría a efecto al día siguiente.

A unas cuantas manzanas de ese lugar, en Amunátegui con Huérfanos, en el Edificio General Norambuena, el general Mendoza todavía se resistía a firmar el acta de constitución de la Junta Militar. Luego de que Leigh le presentara el acta donde figuraba la firma de Pinochet, finalmente Mendoza firmó.

Por la tarde, el Presidente reunió a varios ministros y Letelier informó que habían 13 sumarios en curso contra diversos oficiales por sedición. Esa tarde se recibió la carta de los familiares de 60 suboficiales y marineros detenidos por la Armada y acusados de intento de sublevación, En realidad se habían opuesto a las iniciativas golpistas de oficiales navales en diversas unidades de la Marina.

Ocurrió entonces, a pocas horas antes del desencadenamiento masivo de la violencia golpista algo insólito : bajo la responsabilidad del Presidente y del ministro Letelier, fue designado para conocer los hechos denunciados por los familiares de los marineros y suboficiales, el Auditor de la Armada, Rodolfo Vío Valdivieso, miembro de la 1° Cofradía de Lo Curro y connotado golpista, que por cierto no manifestaría ninguna intención de ordenar investigación alguna al respecto.

Arellano se retiró a su casa al la 1 am del 11 de septiembre. Era el comandante de la agrupación Centro, compuesta por la Escuela de Infantería, Escuela de Suboficiales, regimientos Tacna, Yungay (San Felipe), Guardia Vieja (Los Andes), Coraceros (Viña), Maipo (Valparaíso), Ingenieros (Tejas Verdes).

Por su lado, un activo conspirador de larguísima data, René Silva Espejo, director de El Mercurio y Arturo Fontaine Aldunate (subdirector), fueron informados por el vértice de la conspiración del acontecimiento que ocurriría el 11 y se aprestaban a imprimir el periódico en una imprenta situada en Providencia y no en el centro.

La operación “Silencio” había sido decidida (silenciamiento de las emisoras pro UP), a cargo del coronel Polloni e instrucciones se dieron sobre el tratamiento dado a los partidos de la UP y sus dirigentes, además de una profusión de borradores de proclamas y bandos que serán leídos por el coronel Guillard desde el ministerio de Defensa, en el cual ya se encontraba para esos efectos, el hijo de Arellano, Federico Whilloughby y Alvaro Puga, estos dos últimos notorios contactos con la CIA y luego con la DINA.

A las 8 h32 Guillard leyó la primera proclama de la flamante Junta Militar : “Teniendo presente la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país, 2° la incapacidad del gobierno para controlar el caos.; 3° el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la UP que llevarán a Chile a una inevitable guerra civil, las FFAA y Carabineros de Chile declaran : 1° El señor Presidente de la República debe proceder de inmediato a la entrega de su alto cargo a las FFAA y Carabineros...”.

Luego de escuchar la primera proclama de la Junta Militar, el Presidente Allende hizo uso de la palabra por Radio Magallanes y Radio Corporación :

“En este bando se insta a renunciar al Presidente de la República. No lo haré, notifico al país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica en su Constitución...”

Minutos más tarde, pasadas las 9 am, saldría al aire nuevamente por las emisoras antes citadas :

“En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo.. que en este país hay hombres que saben cumplir con su obligación...”

Pocos momentos antes habían hecho defección los carabineros, que hasta ese momento habían guardado una actitud -la tanquetas- de defensa de La Moneda.

Pasadas las 10 am, el Presidente Allende se dirigió al pueblo expresando su voluntad de combatir hasta rendir su vida :

“Quizá sea la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes.

Yo no voy a renunciar...Siempre estaré junto a ustedes...El pueblo debe defenderse pero no sacrificarse. El pueblo no puede dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse...

Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino, otros hombres superarán este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores.

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza que por lo menos habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.”Terminada su alocución el Presidente se dirigió a los técnicos de Radio Magallanes :

“Eso es todo compañeros”.

Manera de decir tal vez, “Todo se ha consumado”.

Eran pasadas las 10 am de ese 11 de septiembre de 1973.